orgánicas, deriva otro eslabón político, que tendrá nueva repercusión en la impunidad penal: la preponderancia no refrenada de la función pública, o, por mejor decir, del funcionario en sentido estricto, profesional, estable, retribuido y organizado. Cuando la firmeza de la función se consolida y fortifica por garantías orgánicas de estabilidad, que son, bajo otro aspecto, amparos necesarios de la dignidad en el cargo y la rectitud en el ejercicio, la compensación inevitable de tales ventajas procesales, viene a ser, en pruebas de realidad, una omnipotencia jerárquica y profesional, consciente de su fuerza, solidarizada como clase, no refrenada eficazmente como poder. Han surgido otras fortalezas, dominando el campo llano de una ciudadanía descuidada, inerme, y, como esas otras pujanzas, sentirán la misma tentación atrayente de rebasar sus límites, excederse en sus potestades y ensayar el goce de la impunidad, el intento fácil, repetido con fortuna, abrirá una brecha más en la línea defensiva de la ley penal. Brecha la de ahora extensa y varia, porque atacará el impulso las restricciones todas que cohiben el albedrío de la función pública. Desmoronándose el muro penal, por donde esté menos defendido y más atacado, serán eludidas las contenciones amparadoras del derecho ciudada-